

Ahora
EL PUEBLO

DEBATE

Nº 55
SUPLEMENTO
POLÍTICO
Domingo 8 de
septiembre de 2024

¿El retorno del Cóndor? América Latina bajo asedio

La dictadura argentina se enmarcó dentro de lo que se conoce como el Plan Cóndor, que llevó a la creación de regímenes dictatoriales.

Argentina: ¿quién mandó a matar a Cristina Fernández?

Ahora
EL PUEBLO

DIRECTOR
Carlos Eduardo
Medina Vargas

COLABORADOR
Paulo Cuiza

**DISEÑO Y
DIAGRAMACIÓN**
Gabriel Omar
Mamani Condo

CORRECCIÓN
José María
Paredes Ruiz
Karen Keyla
Nina Pino

Redes Sociales

www.ahoraelpueblo.bo

La Paz-Bolivia
Calle Potosí, esquina
Ayacucho N° 1220.
Zona central, La Paz.
Teléfono: 2159313.

Los conceptos planteados en los artículos publicados en Debate no reflejan necesariamente la línea editorial de **Ahora El Pueblo**. Consideramos importante, sin embargo, que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral sobre un tema en particular.

DEBATE

GLENDARCIA **PRENSA LATINA**

Dos años después del intento de asesinato de la expresidenta argentina Cristina Fernández, el juicio sobre el hecho se desarrolla sin la atención de los monopolios mediáticos y sin profundizar en la autoría intelectual ni financiera del ataque.

Son pocos los medios locales de prensa que publican información sobre las audiencias celebradas cada miércoles desde el 26 de junio y en algunos casos lo hacen solo para cuestionar el accionar de la custodia de la exmandataria, sin ahondar en aspectos fundamentales y en el impacto de ese suceso.

Durante las últimas semanas y ante las múltiples interrogantes sobre lo ocurrido, más de 80 intendentes de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, senadores, diputados y otros dirigentes peronistas iniciaron una campaña contra la impunidad y repitieron la pregunta que muchos se hacen desde el 1 de septiembre de 2022: ¿Quién mandó a matar a Cristina?

EL ATENTADO

Ese día, cerca de las 21.00, hora local, un hombre llamado Fernando Sabag apuntó con una pistola a la cabeza de la entonces vicemandataria y titular del Senado cuando ella saludaba a personas reunidas en las afueras de su domicilio, en el capitalino barrio de Recoleta.

Desde hacía varios días, miles de ciudadanos llegaban hasta ese lugar para brindarle su apoyo, extenderle sus manos o pedirle que firmara libros, en un contexto marcado por una fuerte persecución judicial en su contra.

Aunque Sabag apretó el gatillo, el arma — que contaba con cinco balas— no se disparó y el individuo fue detenido por ciudadanos que lo entregaron a la Policía Federal (PFA).

Durante registros en su casa en la zona de San Martín, la PFA halló 100 balas y una laptop, la cual fue analizada junto a su teléfono móvil, cuya información se borró en manos de los peritos por una razón desconocida.

Reportes oficiales indican que la pistola estaba apta para el disparo y fue usada poco antes del ataque, pero el mal empleo por parte del agresor evitó que el proyectil entrara en la recámara y saliera.

El domingo 4, oficiales de la Unidad de Investigación Antiterrorista arrestaron a su novia, Brenda Uliarte, y ambos fueron considerados por la jueza María Eugenia Capuchetti como coautores penalmente responsables del delito de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa.

Además enfrentan cargos por portación de arma de guerra sin autorización legal, aco-

pio de municiones, tenencia de documento de identidad ajeno y falsificación.

También fue detenido un hombre llamado Gabriel Carrizo por su papel en la organización y ejecución de los hechos.

Luego de conocerse lo sucedido, las calles de Argentina se llenaron de integrantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas que se movilizaron para repudiar el ataque, exigir el fin de los discursos de odio y el respeto a la vida en democracia.

EL JUICIO

Luego de numerosas denuncias de Fernández y sus abogados sobre las irregularidades cometidas en el proceso investigativo, el juicio sobre el caso tuvo su primera audiencia el 26 de junio de este año en el Tribunal Oral Federal 6, en esta ciudad.

Yo quería matar a Cristina y ella (Uliarte) quería que muriera, admitió Sabag ante los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.

Gatillé una vez, no dos, y no volví a recargar al arma porque fui interceptado. No tuve momento de salida o escape del plan. La distancia fue prudencial para poder llegar. Estaba a 30 centímetros, dijo.

El sujeto intentó desligar a Uliarte y Carrizo del hecho, afirmó ser “apolítico” y que actuó por fines personales: “Son cuestiones de incomodidad con lo establecido. No hay que buscar una justificación por la cual se cometió el acto”.

Soy el resultado de muchas fallas de la justicia. Traté de pagar el precio de lo que otros no hicieron, añadió. Además aseguró que no tenía relación con la organización ultraderechista Revolución Federal ni recibió dinero para perpetrar el atentado.

También señaló que intentó matar a Fernández “por muchas cosas, porque llevó a Argentina a la inflación”.

Un día después, Marcos Aldazabal, uno de los abogados de la expresidenta, aseveró que Sabag sabe lo que hizo y sus consecuencias.

Aldazabal explicó que, con las declaraciones del individuo, quedó desmontada “la narrativa de que era un loquito” quien trató de asesinar a la exjefa de Estado.

Es una persona que sabe lo que está diciendo. Tiene un vocabulario amplio y respondió todas las preguntas. Entendía todo y es muy consciente de lo que hizo. Parece inteligente y centrado, comentó.

Fue muy explícito al mostrar cómo la persecución judicial contra Fernández — impulsada con algunos medios de comunicación— fue lo que lo llevó a pensar que ella era la generadora de todos los problemas del país y había que matarla, añadió.

Casi dos meses después, el 14 de agosto, Fernández denunció ante ese mismo tribunal que “el partido judicial protege a quienes tuvieron que ver con el atentado”.

“Tenemos sentados acá a los autores materiales, pero no a los ideólogos ni financiadores del hecho. Hay una deuda que saldar con la democracia y con quienes creen que la política debe ser un instrumento para cambiar la vida de la sociedad y no un refugio para quienes pretenden matar y estigmatizar”, aseveró.

Sería muy ingenuo pensar que esas tres personas idearon todo, afirmó la expresidenta e insistió en la necesidad de investigar la implicación de Revolución Federal y el partido Propuesta Republicana, la presunta relación del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman con el hecho y los vínculos de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la eliminación de datos de celulares de varios testigos.

Recordó que poco antes del atentado Milman presentó un proyecto criticando su custodia, donde se refirió a la posibilidad de que alguien intentara matarla para presentarla como una víctima.

El documento termina con una frase: Sin Cristina hay peronismo y sin peronismo hay Argentina. Después nos enteramos que una persona lo escuchó decir: “Cuando la maten estaré camino a la costa”. Los celulares de sus secretarías fueron borrados por el actual director de Tecnología del Ministerio, en el estudio de Bullrich, denunció.

Asimismo, señaló que la instrucción de Capuchetti fue “un desastre absoluto” y dijo que nunca se intentó dar con los autores reales ni hubo un proceso imparcial.

El partido judicial y los medios hegemónicos de comunicación fueron factores fundamentales en la exacerbación de la violencia. Hoy no hay golpes militares. Se cambió de metodología. En épocas de odio y de redes, ya no es necesario desaparecer ni matar a nadie, aunque en algún caso parece que sí. Lo que articula todo esto es el poder económico concentrado, indicó Fernández.

La exmandataria relató que antes del ataque ocurrieron sucesos como el lanzamiento de piedras a su despacho en el Senado, la colocación de carteles culpándola de las muertes durante la pandemia del Covid-19, las mentiras y difamaciones del fiscal Diego Luciani y la colocación de vallas alrededor de su casa.

Todo eso contribuyó a un clima que llevó al intento de asesinato fallido. La Policía de la ciudad fue muy agresiva con los peronistas y muy cuidadosa y permisiva con quienes venían a insultarme. Hizo también tareas de inteligencia y está comprobado, aseveró.

Afortunadamente no vi el arma. Cuando una mujer ejerce el poder y no lo hace en la orientación que quieren los sectores concentrados, se genera mucha más resistencia y violencia. No se me ocurrió nunca que en la Argentina democrática pudiera haber un atentado. Me quitaron la proximidad que tenía con la gente y eso afecta, apuntó.

Musk: amenaza global

LA JORNADA

Elon Musk, dueño de corporaciones como X (antes Twitter), Tesla, SpaceX y Starlink, entre otras, mantiene un enfrentamiento con la justicia brasileña debido a su empeñamiento en desafiar órdenes judiciales. El choque comenzó a inicios de año, cuando X se negó a cumplir la sentencia del juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes para bloquear cuentas vinculadas a las milicias digitales que operan a favor del expresidente fascista Jair Bolsonaro, admirador y correligionario de Musk en la ultraderecha global.

Cuando el magistrado dispuso sanciones administrativas en respuesta al desacato, el magnate recurrió a la argucia de cesar las operaciones de la plataforma dentro del país, de modo que no hubiera un ente al que castigar, al tiempo que X seguía activa y mantenía operando las cuentas ilegales. Esta burla a la justicia orilló a De Moraes a ordenar el cierre completo de X en Brasil, pero Musk usó su empresa proveedora de internet satelital para violar la disposición que ya fue ratificada por el Supremo.

En el transcurso de su campaña contra la ley, el empresario empleó su red social (donde sus tuits son vistos por todos los usuarios, quieran o no) para lanzar una campaña de linchamiento contra el togado y presentar su protección a los perfiles fascistas como una defensa de la libertad de expresión.

Desde que el magnate adquirió la plataforma en octubre de 2022, reactivó cuentas previamente bloqueadas por la propia compañía en las cuales se difunden mensajes homófobos, neonazis, de supremacismo blanco, misóginos, tráfobos, teorías de la conspiración y, en general, discursos de odio que hoy se encuentran prohibidos en muchos países como parte de los esfuerzos contra la discriminación y la violencia.

Diversos estudios han confirmado el aumento en la producción y circulación de los ataques contra mujeres, integrantes del colectivo de la diversidad sexual, personas racializadas y sectores progresistas, así como la creciente impunidad con que se saldan dichas agresiones en estos casi dos años.

En momentos en que la élite de los multimillonarios (quienes acumulan mil millones de dólares o más) concentra una porción de la riqueza mundial mayor que nunca y en que se ha vuelto cada vez más evidente su determinación de capitalizar su poder económico en forma de poder político, la ausencia de controles a su actuación pone en riesgo a la democracia, el Estado de derecho, al medioambiente y a la vida misma de los 8 mil millones de seres humanos.

No se trata de una exageración: la capacidad de las corporaciones para bloquear durante décadas las advertencias sanitarias en torno a los riesgos que entraña el consumo de tabaco causó la muerte de millones de personas, y su negativa a reconocer la toxicidad de la gasolina con plomo intoxicó a millones de humanos, en particular a menores de edad. La avaricia de la United Fruit Company por las tierras centroamericanas desató golpes de Estado, sangrientas dictaduras y el genocidio contra los pueblos indígenas.

La cruzada de Musk para colocarse por encima de las leyes de un país soberano, así como la manera en que recurre a las compañías que controla a fin de burlar a las autoridades, pone de manifiesto la urgencia de crear una legislación internacional que frene el poder de los individuos ultrarricos.

Su personalidad narcisista y sociopática lo ha convertido en el caso más conspicuo de ultrarrico que pisotea de manera abierta la ley en la actualidad, pero de ningún modo es el único.

Basta con mirar hacia México, donde ahora mismo se encuentran en un punto álgido las presiones corporativas para que se aprueben las leyes que convienen a las transnacionales y descarrilar las que favorecen a los ciudadanos.

Ante la magnitud del desafío, los gobiernos comprometidos con la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la democracia y los derechos humanos deben formar un frente común a fin de crear los mecanismos institucionales, jurídicos, tecnológicos, económicos y políticos necesarios para marcar un alto a individuos y corporaciones que constituyen poderes supranacionales de facto con una indisimulada disposición a subvertir países enteros.



¿El retorno del Cóndor? Las señ

CARMEN PAREJO RT

Argentina despertó el 2 de septiembre con la Universidad de las Madres (UNMA) vallada y rodeada por efectivos de la policía nacional, que impedían el acceso de los trabajadores al centro.

El presidente argentino, Javier Milei, desde su llegada al Gobierno, inició una cruzada en contra de la educación pública —a la que acusa de ‘adoctrinar’—, que implicó duros recortes a los medios económicos para su propio desarrollo, entre otras muchas medidas coercitivas. Mientras favorece la enseñanza en centros privados, a su parecer, mucho más ‘objetivos’ en sus programas de estudios.

La Universidad de las Madres, antigua Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, es fundada por la asociación homónima que nació el 30 de abril de 1977, cuando 14 mujeres marcharon frente a la sede del Ejecutivo para exigir al dictador Jorge Rafael Videla conocer el paradero de sus hijos desaparecidos.

Más allá de la guerra contra lo público del actual presidente argentino, debemos sumar el combate contra la memoria. En ese sentido, la persecución contra las Madres de Plaza de Mayo no solo se ha limitado a tratar de destruir instituciones académicas.

A finales de febrero de 2024, las nuevas autoridades de la televisión pública argentina excluyeron de su programación a *Madres de la Plaza*, un programa emitido desde 2008, que servía para denunciar los casos de desapariciones forzadas de la dictadura.

En este proceso de desmemoria, además, tras los actos de conmemoración del Día por la Memoria, por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo, se llevaron a cabo acciones de respuesta por parte de las autoridades. Así se taparon pañuelos pintados de las Madres, ubicados frente a la sede del Comando Monte XII, en Misiones; y se procedió a retirar el monumento de homenaje a esas mismas mujeres, en el municipio de Marcos Juárez, en Córdoba.

La estampa del lunes sirve para visualizar, en su expresión simbólica y también práctica, algo aún más aterrador.

La dictadura argentina se enmarcó dentro de lo que se conoce como el Plan Cóndor, que llevó a la creación de regímenes dictatoriales —bajo el paraguas de Washington y de las oligarquías nacionales latinoamericanas— en países como Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, así como la persecución y el asesinato de más de 100.000 personas.

El contexto era la Guerra Fría y, bajo el amparo de la anticomunista Doctrina Truman —una actualización coyuntural de la Doctrina Monroe—, EEUU justificaba su



Señales de una América Latina bajo asedio

injerencia en lo que considera todavía su “patio trasero”.

La consecución de distintos golpes de Estado, la financiación de grupos armados contrarrevolucionarios, la persecución de izquierdistas e incluso la desaparición física de sus militantes, así como la creación de regímenes afines a sus intereses, fueron parte de las consecuencias. A su vez, también sirvió como un laboratorio de pruebas para la implementación del modelo neoliberal, cuyo principal referente será el Chile de Augusto Pinochet.

Las oligarquías latinoamericanas y sus manifestaciones político-partidarias se han desarrollado con base en un modelo de dependencia, donde ellas actúan como ‘virreyes’ al servicio de la metrópoli y a costa de sus pueblos. El carácter fuertemente reaccionario y lacayo a intereses externos de estas oligarquías entra en conflicto, de forma natural, con cualquier proceso de emancipación popular y nacional en la región.

Sin embargo, son fundamentales en un escenario general de pugna geopolítica, donde EEUU necesita mantener el control en América Latina. Todo ello favorecido, a su vez, por un avance organizativo de la extrema derecha a nivel internacional que atiende, igualmente, a este conflicto en ascenso.

En las últimas semanas hemos asistido a una nueva ofensiva contra la República Bolivariana de Venezuela, que se ha manifestado en distintas esferas: el no reconocimiento de su sistema político, sus instituciones y su soberanía; ataques cibernéticos y cortes eléctricos; y el secuestro, en connivencia con las autoridades de República Dominicana, de un avión presidencial venezolano.

De forma paralela, la presión contra otros Estados ha quedado manifiesta en los intentos injerencistas de los diplomáticos estadounidenses en México y Honduras, que, finalmente, han resultado un fracaso por la respuesta contundente de defensa soberana que han implementado sus dirigentes.

Mientras, el Gobierno de Ecuador, que vulneró la soberanía de México con el secuestro ilegal de Jorge Glas en la embajada mexicana hace unos meses, en una escenificación macabra de la ironía, firmaba nuevos acuerdos con el Comando Sur de EEUU centrados en “la implementación y fomento de los derechos humanos”.

Del mismo modo, Gabriel Boric, quien se ha destacado como un líder contra la soberanía venezolana en las últimas semanas, seguía este mismo guion. El Comando Sur y la Armada de Chile daban inicio, el 2 de septiembre, al Ejercicio Naval Multinacio-

nal Unidas 2024, siendo esta la segunda vez, en menos de un mes, que el Gobierno chileno participa en unos ejercicios navales en el océano Pacífico junto a EEUU.

“¿Por qué es tan importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo del litio, que es necesario para la tecnología actual. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio: Argentina, Bolivia, Chile. Tienes las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienes los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene mucho que ver con nuestra seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego”, declaraba Laura Richardson, jefa del Comando Sur, a finales de enero de 2023.

Sin embargo, Richardson se equivoca: no tienen, ni van a tener asegurados todos esos recursos. Por eso, los nuevos Videla, Banzer o Pinochet caminan por América Latina, del brazo, una vez más, de los Estados Unidos de América.



// ILUSTRACIÓN: AI

FOTO: X @PCARGENTINO

La deudocracia y su implicación en la crisis climática

JOHN FREDDY GÓMEZ

CAMILA GALINDO

TELESUR

La deudocracia como disputa semántica, y luego como conceptualización frente al poder de la deuda y/o al gobierno de la deuda, implica la configuración de un dispositivo de intervención a partir de sus instituciones, agentes y procesos determinando la vida del conjunto de la población y por ende de las instituciones sociales, como lo es el Estado.

La deudocracia conlleva la supremacía del sistema financiero y del sistema de la deuda en el que los acuerdos, convenciones, normas, leyes y constituciones se subordinan a preceptos técnicos derivados de la manutención del poder de las finanzas.

Este poder no solo genera la imposición de las normas que privilegian al sistema financiero y subordina los derechos de las poblaciones, sino que al mismo tiempo atraviesa la configuración simbólica de los sujetos ocasionando una incorporación de preceptos corporalizados y asumidos como naturales y universales.

La deudocracia expresa un sistema que engendra la imposibilidad de cumplir con las deudas y postra al deudor a una relación de subordinación con respecto al acreedor, este proceso no solo puede ser visto desde los agentes sino también desde las instituciones.

Es el caso de las comunidades y/o familias en los Estados periféricos, que se ven obligadas a recurrir al sistema de la deuda para poder llegar a fin de mes y garantizar una mínima canasta básica, puesto que los preceptos técnicos implican la flexibilización, liberalización y precarización del mundo del trabajo, generando una reducción dramática del salario y transfiriendo la manutención de la población al sistema de la deuda.

Así mismo, en el caso de los Estados periféricos, que derivado de las ataduras del sistema financiero y sus preceptos técnicos de estabilidad financiera, comprende la subordinación del Estado a la búsqueda de recursos de deuda en el sistema nacional e internacional, conllevando a una subordinación hacia las instituciones fi-

nancieras internacionales, Estados metropolitanos y agentes del sistema.

Esta dependencia de la deuda como fuente de ingresos es generada por las reformas apalancadas por la misma manipulación financiera como son, entre otras, la reducción de los impuestos arancelarios e impuestos directos y progresivos, la imposibilidad de la emisión monetaria y la ficción de la autonomía de la banca estatal, y la privatización de empresas públicas y la pérdida de recursos permanentes del Estado.

La deudocracia, como forma de gobierno de una élite económica, parte de la imposición de preceptos, normas y convenciones que se convierten en habitus y se corporiza gracias a las violencias económicas de la deuda y a su clarificación en la violencia simbólica de la norma y la ideología de mercado.

La deudocracia cuenta con sus leyes naturales como preceptos técnicos, sus instituciones nacionales e internacionales y sus agentes, generando un horizonte ideológico del individuo, de las libertades negativas y del consumo como realización del ser.

Aunque la deudocracia puede demandar un río de tinta en el análisis de sus procesos, mecanismos y agentes es importante evidenciar las consecuencias materiales de este sistema con relación al metabolismo del planeta. La mayor parte de los economistas clásicos y neoclásicos no considera la finitud del planeta y crean en sus relatos, ficciones

y proyecciones metafísicas que impiden evidenciar los límites propios del planeta.

La incompreensión de la finitud del planeta por parte de este régimen de acumulación, y anudado a esto el sistema de la deuda que impone un ritmo de consumo demencial en razón de las múltiples obsolescencias de las mercancías, ha generado en el tiempo una fractura metabólica que ha llevado a la especie a punto del abismo.

La deuda global ha alcanzado 351 billones de dólares, aproximadamente 2,3 veces más de lo que produce el planeta, este desequilibrio puede ser rastreado a partir de la década de los años 70 del siglo XX evidenciando el desequilibrio del sistema económico. Asimismo, la crisis metabólica del planeta, con su consecuencia más evidente: el calentamiento global, se solapa directamente con los tiempos del sistema de la deuda, la década de los años 70 del siglo XX.

El sistema de la deuda ha implicado el incremento de una demanda artificial que determina a los sujetos y los lleva directamente a fracturar los límites del medioambiente generando procesos de devastación masiva de las especies en el planeta, nuestra especie incluida. Es hora de atacar y objetar la deudocracia, el sistema de la deuda y construir un horizonte que nos permita realizarnos sin la necesidad del consumo y a partir del relacionamiento tanto con la otredad humana y natural, construir un horizonte de esperanza digno para todas, todos y todes.





Incendios forestales, violencia y ajetreo electoral en Ecuador

PRENSA LATINA

Más de 450 incendios forestales fueron reportados en 19 provincias de Ecuador durante esta semana que concluye hoy aquí en medio de un repunte de violencia y preparativos para los comicios de 2025. Las provincias más afectadas son Pichincha, Cotopaxi, El Oro, Azuay, Carchi, Imbabura, Chimborazo, Guayas y Loja.

En el cantón Quilanga, en la sureña provincia de Loja, las llamas consumieron más de siete mil hectáreas, 79 familias resultaron afectadas, tres personas heridas, 207 evacuadas, tres viviendas destruidas y más de seis mil animales muertos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR).

Después de 12 días de un voraz incendio en esa zona, las llamas fueron controladas con el apoyo de más de 300 bomberos de diferentes ciudades del país, junto a equipos enviados por el Gobierno de Perú y las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Mientras tanto, en esta capital varios incendios forestales cubrieron la urbe de una espesa capa de humo, por lo que el Ministerio de Educación ordenó la modalidad de clases virtuales para 32 centros educativos debido a la contaminación atmosférica ocasionada por el fuego.

El alcalde quiteño, Pabel Muñoz, mencionó entre las afectaciones de los siniestros que un plantel avícola perdió toda su producción de pollos porque terminaron asfixiados y 20 cabezas de ganado perdieron la vida en la localidad de Itulcachi por la misma razón, reiteró.

Además, el funcionario catalogó a la emergencia como la más grave en lo que va del año en la capital y según la SGR, el fuego consumió extensas áreas de vegetación y ha provocado otros daños que incluyen la muerte de 32 mil aves de granja y 20 reses intoxicadas por el humo.

En medio de esa situación, un repunte de la violencia con varios asesinatos en diferentes territorios del país causó preocupación entre los ciudadanos pese a los constantes estados de excepción decretados por el Ejecutivo.

Además, el Gobierno dio a conocer que analizan la posibilidad de colocar francotiradores en las cárceles, luego de que un dron con explosivos fuera detectado en el techo de la prisión de máxima seguridad La Roca, la mañana del jueves.

El Ministerio del Interior confirmó más tarde que el aparato tenía 40 libras de explosivos, sin embargo explicó que la situación fue controlada y solo sufrió daños el sobretecho de la prisión.

En ese contexto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continuó con el desarrollo del cronograma de cara a las votaciones generales del próximo año.

El ente electoral aprobó el viernes la coalición conformada por los movimientos políticos Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO).

Se trata de la única alianza de carácter nacional que se inscribió hasta el 30 de agosto ante el ente electoral.

La RC había elegido como sus precandidatos a la presidencia y vicepresidencia a Luisa González y Diego Borja, respectivamente. Mientras que RETO inscribió al empresario guayaquileño Eduardo Sánchez y a Katya Caicedo.

Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado cómo quedaría el binomio luego de la alianza de ambos movimientos políticos.

El 9 de febrero de 2025, más de 13 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir al presidente, vicepresidente, 151 legisladores y cinco parlamentarios andinos.

Entre los postulantes se encuentra el actual mandatario Daniel Noboa, quien aspira a la reelección y, en medio de la abultada papeleta, las encuestas apuntan a repetir el balotaje de 2023, cuando disputó la presidencia con la candidata González de la RC, ahora en alianza con RETO.

A propósito, el CNE reiteró esta semana que tanto el presidente de la República como cualquier funcionario activo del Estado deben presentar licencia para hacer campaña en los comicios.

Noboa confirmó que se postulará para la reelección, pero para eso necesitaría pedir licencia del cargo durante la campaña electoral, periodo en que la vicepresidenta Verónica Abad debería asumir la jefatura del Ejecutivo, como señala la Constitución. Pero el mandatario busca una alternativa para evitar esa situación.



Caricatura global